

Paraguay, un golpe de Estado disfrazado

Nuestra Palabra | 23 Junio 2012

En las vísperas de cumplir tres años del golpe de Estado en Honduras, las consecuencias aun se sienten a pesar de los intentos de remendarla, la institucionalidad se resquebrajó para siempre. En junio 2009 se advertía que otros golpes de Estado vendrían en América Latina, porque nuestras democracias son débiles, perseguidas por un pasado militarista y adaptadas a una clase política-económica que no tiene fronteras, solo intereses comunes.

En 24 horas, Fernando Lugo dejó de ser presidente de Paraguay. Una derecha representada en el senado paraguayo le montó un juicio político, lo encontró culpable y lo condenó a dejar la presidencia, acusándolo de no ser capaz de cumplir las funciones que su cargo demandaban. Le faltaban solo 9 meses para dejar el cargo que asumió en 2008 de la mano de una coalición que lo abandonó en el último momento para ser parte de los jueces que lo sancionaron.

Fernando Lugo, quedará en la historia como el Obispo que dejó la Iglesia para ser presidente de un país que durante 60 años había sido gobernado por el Partido Colorado, el partido creado por el dictador Alfredo Stroessner, responsable de miles de violaciones a los derechos humanos.

El nuevo golpe de Estado, más elaborado que el ocurrido en Honduras hace tres años, se facilitó porque en la Constitución del país suramericano se contempla el "juicio político" como un mecanismo para exhortar al presidente de la república y a otros altos cargos. Pero no se diferenció del hondureño por la evidente brutalidad con la que se tuercen los mecanismos constitucionales ignorando la voluntad popular. Así nacen los golpes de Estado disfrazados de legalidad.

Una de las recomendaciones del Informe de la oficial Comisión de la Verdad y la Reconciliación para superar crisis políticas, como las que apresuraron el golpe de Estado en Honduras, es la incorporación del juicio político a nuestra legislación. Entre otras, del caso de Paraguay se puede aprender que estos mecanismos democráticos no funcionan si no están acompañados de una eficiente vigilancia ciudadana, porque los políticos en nombre justamente de la democracia dan golpes de Estado disfrazados de legalidad.